COFINTA: Nueva Alternativa Agraria

David Mena

La tierra ha sido el pivote sobre el que ha girado la economía del país y de donde han surgido los poderosos grupos económicos y políticos actuales: cafetaleros, azucareros, algodoneros, ganaderos y los industriales más ricos cuyo cordón umbilical se conecta con la actividad cafetalera.

Los intereses que giran en torno a la tierra siempre se han manifestado políticamente para lograr su control y uso; en nuestro país existen antecedentes, que se remontan al siglo pasado, de destrucción de viejas formas de producción agrícola y, por tanto, de la tenencia de la tierra.

Es conocido el hecho de que en nuestro país la tierra —en cantidad y calidad— se concentra en reducidos grupos económicos y que la gran masa de familias campesinas tiene dificultades constantes y crecientes de lograr acceso a ésta. Esta concentración de la tierra es resultado de un proceso histórico en el que la participación estatal ha sido vital y, como es lógico suponer, en el fondo de esta situación se han jugado permanentemente diversos intereses.

En la historia reciente —década de los años sesenta— se han perfilado ideas, proyectos y acciones concretas sobre las funciones que debe cumplir la tierra en la estructuración de la economía y la sociedad salvadoreña.

Algunos de estos proyectos son de origen externo como el de la Alianza para el Progreso que propugnaba reformas agrarias en los países subdesarrollados para racionalizar las relaciones sociales en el campo y convertirlos de países tradicionales a modernos, es decir, capitalistas. En algunos países latinoamericanos se realizaron estas reformas y en otros, como el nuestro, encontraron resistencia de los grupos agrarios que saldrían afectados con dichos planes.

En los primeros años de la década actual diversos sectores políticos plantearon alternativas de

solución al problema que representa la actual tenencia concentrada de la tierra. El problema se refiere a que el sistema capitalista no puede desarrollarse si no es con una redistribución de la tierra, que posibilite, a la gran masa campesina, ingresos adecuados para poder consumir mercancías de origen industrial. Es decir, se veía la necesidad de crear un mercado consumidor que diera salida a la producción industrial frenada por las dificultades que había ocasionado la guerra contra Honduras, principal mercado para la producción salvadoreña.

En esta perspectiva se ubica el intento del equipo político y técnico del gobierno de Molina de realizar una transformación agraria que lograra este objetivo económico y que políticamente redituara a corto plazo, controlando a la masa campesina que daba muestras de descontento, que podría traducirse en acciones inconvenientes para la estabilidad política que requiere el sistema social y económico en conjunto.

Es de suponer que en esta concepción de la función que le asignaban al factor tierra —crear consumidores— había intereses de sectores industriales aliados con capital extranjero, que veían la factibilidad política y económica de llevar adelante su plan.

Mientras esta alternativa no fue más que un proyecto, no hubo manifestaciones públicas en contra de parte de los grupos ligados a la tierra, excepto el que por presiones, provocaron la “renuncia” de varios ministros. Sin embargo, cuando tomó cuerpo el primer distrito de transformación agraria, se creó FARO —aglutinador de terratenientes— que desató una campaña contra la medida gubernamental de variadas formas; a ésta se unieron otros grupos que controlan el agro: cafetaleros, cañeros, ganaderos, algodoneros, etc., organizados en ANEP, que representa todas las organizaciones gremiales de la cla-

se económicamente dominante.

El binomio FARO-ANEP, y aliados (abogados, comerciantes, industriales, etc.), triunfó finalmente y doblaron la muñeca al gobierno de Molina. La alianza empresarial había doblegado al Estado, a la fracción del ejército que apoyaba el proyecto, y también al capital extranjero que estaba detrás del plan agrario. Este triunfo permitió imponer en el gobierno a un individuo de confianza rodeado de ministros y asesores de la misma catadura, que obviamente no repetirán la experiencia anterior.

Y, sorpresa (¿?), aparece un proyecto con nuevas pretensiones sobre el agro. Se promueve la creación de COFINTA (cuyos antecedentes encuentran en ANEP, 1972, con su proyecto de crear una financiera nacional agrícola) que pretende formar un mercado libre de tierras que permita formar "verdaderos empresarios agrícolas".

¿Cuáles han sido las reacciones ante este nuevo proyecto? ANEP apoyó inmediatamente la creación de COFINTA, con algunas observaciones sobre la composición de la junta directiva, evidentemente para controlarla, pero fue rechazada por sectores organizados de los terratenientes.

Es interesante leer en los reportajes periodísticos los mismos argumentos que se utilizaron contra el proyecto anterior: ineficiencia de las pequeñas parcelas, disminución de las divisas, "la tierra no alcanza para todos", más burocracia, reducción de ingresos fiscales, desempleo, disminución en la producción agrícola, etc.

¿De dónde vienen estos argumentos? De algunos miembros de FARO-ANEP: Asociación Cafetalera de El Salvador y Asociación de Ganaderos de El Salvador, acompañados de la Sociedad de Abogados de Occidente. Los dos primeros, debe recordarse, son dueños por obra y gracia del Estado (1934) del Banco Hipotecario y, hasta 1961, del Banco Central de Reserva, donde mantienen su presencia en la Junta Directiva.

La Cafetalera amenaza —caso de crearse COFINTA— con el desaliento de sus asociados para producir café y, por lo tanto, con la reducción de impuestos y divisas para el país. Les preocupa cualquier proyecto agrario que llegue a reducir el contingente de mano de obra barata que utilizan en las épocas de cosecha y en otras actividades agrícolas.

La Ganadera, por su parte, dadas sus características de producción —uso extensivo de la tierra para reproducción de ganado— se preocupa del posible encarecimiento de las tierras (compra y arrendamiento) si el proyecto llegara a funcionar. Se lamentan de que las empresas parceladoras privadas tendrán un carácter exclusivista, y por lo tanto excluyentes, y de que será un negocio tentador el formar parte de estas intermediarias en el sistema propuesto.

En ambos casos, cafetaleros y ganaderos, se oponen sistemáticamente a cambios en la situación agraria, dado que son beneficiarios directos en las condiciones actuales. Además, no les preocupa el financiamiento, ya que reciben del sistema bancario un flujo constante de capital en diferentes líneas de crédito.

La oposición de los terratenientes y sus intelectuales incluye los proyectos reformistas y otros como el actual (COFINTA) de matiz más especulativo, en un primer momento, pero con proyecciones de más largo alcance en el uso de la tierra y en la utilización de fuerza de trabajo agrícola. Y esto porque los intereses que se manifiestan tienen una perspectiva diferente de aquéllos que respaldaban al gobierno molinista.

Lo inmediato que se observa es que diversos grupos terratenientes quieren vender sus tierras a precios elevados, y otros ven la posibilidad de utilizar al Estado actuando como intermediarios en la compra-venta de tierras y obtener pingües ganancias. El Presidente del ISTA dio una pista clara sobre este fenómeno: declaró ante la Asamblea Legislativa que habían rechazado la oferta de 55 haciendas de "tierras malas", de acuerdo al criterio técnico de dicha institución (Por qué quieren vender es un tema relacionado con las presiones campesinas en diferentes lugares del país).

Esto da una idea de los intereses inmediatos, pero la tendencia de esta política de tierras apunta a una nueva situación. Creemos que en el país se está perfilando un "nuevo modelo" en el agro que ya no

ve la necesidad de crear un mercado consumidor, sino, "empresarios" productores de materias primas que a su vez sean consumidores de otro tipo de productos industriales: herramientas, maquinaria, químicos, etc. Es decir, la idea no es formar productores de granos básicos —menos aún, la de resolver los problemas seculares de la masa campesina— sino, de productos agropecuarios utilizables como materias primas en agroindustrias.

En esta actividad estarían interesados aquellos capitalistas que necesitan reproducir su capital y que dadas las condiciones de rentabilidad en otros sectores, por ejemplo industria o construcción, ven la oportunidad de invertir en el agro y utilizar a estos "nuevos empresarios agrícolas" como proveedores de materias primas: frutas, legumbres, carne, fibras y otros productos agropecuarios.

Por otra parte, observando la tendencia del capital extranjero a invertir en Latinoamérica en actividades agroindustriales, hace pensar en su interés en que se den en nuestro país, las condiciones para de-

sarrollar sus actividades económicas; asimismo, probables alianzas entre grupos económicos nacionales, interesados en COFINTA, y el mencionado capital extranjero, que ven una manera distinta de utilizar la tierra y la fuerza de trabajo, de lo tradicionalmente efectuado en el café, por ejemplo.

Vendría a ser una ampliación de lo que durante muchos años ha hecho la Cigarrería Morazán: asistencia técnica y crediticia a "empresarios independientes", que suman varios cientos en el país para que provean de tabaco a la fábrica de cigarrillos. Es evidente que dependen de las políticas de esta presa tabacalera de capital inglés.

La nueva estrategia de los capitalistas criollos "modernizantes" con el capital extranjero, y la actitud "tradicional" de los viejos terratenientes, parece que tiene puntos de fricción en los que no se han puesto de acuerdo, y veremos todavía ciertos jaleos hasta que la lógica del capital —la ganancia— dirima estas pequeñas contradicciones. Es obvio que la masa campesina seguirá siendo creadora de ganancias y bienestar para pocos.